

2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"  
Memorándum número: INFOEM/COM-JGLH/COOR/414/2017  
Metepéc, Estado de México a dieciocho de septiembre de 2017.

  
**MAESTRA CATALINA CAMARILLO ROSAS**  
**SECRETARIA TÉCNICA DEL PLENO**  
**PRESENTE**

De conformidad con los artículos 14, fracciones X y XI y 16, fracción X, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, le hago llegar el **voto particular** del Comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto de la resolución definitiva presentada en la trigésima segunda sesión ordinaria de este Pleno:

- 01737/INFOEM/IP/RR/2017– Ayuntamiento de Coacalco de Becerra.

Con el fin de que se agregue a la resolución definitiva correspondiente para su archivo y resguardo.

Sin otro particular me despido de usted y le envió un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

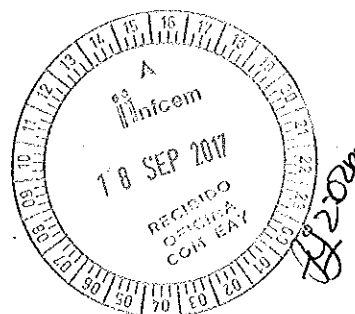
  
**LIC. SOLEDAD ALICIA VELÁZQUEZ DE PAZ**  
**COORDINADORA DE PROYECTOS**

C.c.p. Maestra Eva Abaid Yapur, Comisionada, para su conocimiento.

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y  
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios  
Teléfono: (722) 2 26 19 80 \* Centro de atención telefónica: 01 800 821 04 41

Pino Suárez S/N, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan No. 111,  
Col. La Michoacana, Metepec, Estado de México, C.P. 52166

[www.infoem.org.mx](http://www.infoem.org.mx)



## VOTO PARTICULAR DEL COMISIONADO JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ DEL RECURSO DE REVISIÓN 01737/INFOEM/IP/RR/2017

### Líneas argumentativas:

La falta de impugnación respecto al resto de los requerimientos que no fueron manifestados en el recurso de revisión, no debe entenderse como actos consentidos.

La figura de actos consentidos no debe ser invocada en el derecho humano fundamental de acceder a la información pública gubernamental.

El Órgano Garante del derecho de acceso a la información pública no debe imponerles las cargas formales del proceso jurisdiccional a los particulares.

Lo que este Órgano Garante realice en materia de suplencia de la queja no afecta la igualdad de las partes sino procura el cumplimiento de los deberes de protección del derecho humano.

Restringir el derecho de acceso a la información pública del particular al no ordenar la información solicitada por no impugnar la falta de entrega de los documentos solicitados, debilita la efectividad de la garantía de este derecho humano al hacerla depender de un hecho desconocido.

Los órganos del Estado, tienen el deber que tienen dentro del margen de sus atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos fundamentales.

## Índice

## Contenido

|                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Consideraciones Generales.....                                                                                               | 2  |
| II. De los requerimientos planteados en el recurso de revisión. ....                                                            | 3  |
| III. Los actos consentidos no deben invocarse en el derecho fundamental de acceder a la información pública gubernamental. .... | 10 |

### I. Consideraciones Generales.

1. He concurrido con mi voto particular de la presente resolución emitida por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, en su Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete, en el recurso de revisión promovido por [REDACTED]

[REDACTED] en contra de la respuesta del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, procedimiento al que se le asignó el número de expediente 01737/INFOEM/IP/RR/2017.

2. La resolución señala que es procedente el recurso de revisión, pero infundadas las razones o motivos de inconformidad hechas valer por el particular en términos del Considerando Cuarto de la resolución, por lo que se modifica la respuesta otorgada por el SUJETO OBLIGADO.
3. Mi voto particular se deriva del hecho de que se haya invocado la figura de actos consentidos en el presente asunto, resultando del todo innecesario hacer referencia a dicha figura, de acuerdo a la respuesta proporcionada a la solicitud, lo cual he manifestado en diversas ocasiones, señalando que no deben invocarse en el derecho de acceso a la información pública.
4. Por tal motivo y en términos de lo señalado por el artículo 14 fracción XI del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios formulo el presente voto particular.

## II. De los requerimientos planteados en el recurso de revisión.

5. [REDACTED], mediante su solicitud de acceso a la información 00074/COACALCO/IP/2017, requirió lo siguiente:

**Solicitud 00074/COACALCO/IP/2017:**

6. La particular requirió del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, lo siguiente:

- 1. Relación de la deuda pública municipal desde 2010 a la fecha de la entrega de la información incluyendo el destino de los recursos otorgados.*
- 2. Copia de la nómina municipal por área incluyendo nombre completo, puesto, fecha de ingreso, salario, superior a quien reporta y prestaciones.*
- 3. Relación de las carpetas de investigación que existan contra funcionarios del municipio, incluyendo nombre, número de carpeta, razones de la investigación, fecha de inicio y en su caso resolución; de igual manera se solicita copia de toda la información pública contenida en dichas carpetas y copia de las versiones públicas de todo lo actuado dentro de las mismas.*
- 4. Relación de las auditorías realizadas al municipio durante 2016 y lo que va del 2017, incluyendo periodo de revisión, cuentas o áreas auditadas, resultado de las auditorías; de igual manera se solicita copia de todo lo actuado dentro de dichas auditorías, de los resultados obtenidos y de las acciones a ejercer por parte del auditor.*

7. En respuesta a lo inicialmente solicitado el Sujeto Obligado proporcionó como respuesta lo siguiente:

- Por lo que respecta al requerimiento del numeral 1, relativo a la "...relación de la deuda pública municipal desde 2010 a la fecha de la entrega de la información incluyendo el destino de los recursos otorgados..." EL SUJETO OBLIGADO refirió a través del oficio número TMC/JUR/262/2017 suscrito por el Tesorero Municipal que "...RESULTA INCONGRUENTE Y POR ELLO IMPROCEDENTE LA PETICIÓN DE RELACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL DESDE 2010 A LA FECHA DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN INCLUYENDO EL DESTINO DE LOS RECURSOS OTORGADOS: EN RAZÓN DE QUE DEUDA Y SUFICIENCIA DE RECURSOS NO SON COMPATIBLES; CONSECUENTEMENTE, LA REFERENCIA DE RECURSOS OTORGADOS ES TOTALMENTE INCONGRUENTE CON EL TEMA DE DEUDA...".
- Por lo que concierne al punto 2 de la solicitud de información pública, referente a la *copia de la nómina municipal por área incluyendo nombre completo, puesto, fecha de ingreso, salario, superior a quien reporta y prestaciones*, es de referir que EL SUJETO OBLIGADO remitió el oficio número DGA/FGC/0951/2017 suscrito por el maestro Francisco García Camarena, en su carácter de Director General de Administración, en el que manifestó que "...anexo al presente escrito sírvase encontrar la información solicitada por el peticionario..." adjuntando el siguiente documento:

[illegible]

- Por lo que se refiere al numeral 3, relativo a la *relación de las carpetas de investigación que existan contra funcionarios del municipio, incluyendo nombre, número de carpeta, razones de la investigación, fecha de inicio y en su caso resolución; de igual manera se solicita copia de toda la información pública contenida en dichas carpetas y copia de las versiones públicas de todo lo actuado dentro de las mismas.* En este sentido, EL SUJETO OBLIGADO mediante oficio número DGJC/648/2017 suscrito por el Director General de Jurídico Consultiva manifestó que “... después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección General Jurídico Consultiva, no existe archivo alguno de las “Carpetas de Investigación” que existen en contra de Funcionarios del Municipio toda vez que en el artículo 19 del Bando Municipal en los asuntos en que se asuma la Representación Jurídica del Municipio y del H. Ayuntamiento, no obstante ello, es de precisar que en términos de los artículos 127, 128, 129, 131 del Código Nacional de Procedimientos Federales, compete al Ministerio Público conducir la investigación...”

- Por lo que respecta a lo requerido en el numeral 4, en relación a *las auditorías realizadas al municipio durante 2016 y lo que va del 2017, incluyendo periodo de revisión, cuentas o áreas auditadas, resultado de las auditorías; de igual manera se solicita copia de todo lo actuado dentro de dichas auditorías, de los resultados obtenidos y de las acciones a ejercer por parte del auditor.* En lo que toca a, este punto EL SUJETO OBLIGADO a través del oficio número TMC/JUR/262/2017 suscrito por el Tesorero Municipal que "...NO ES DE LA COMPETENCIA LEGAL O ADMINISTRATIVA DE ESTA TESORERÍA MUNICIPAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, YA QUE LA FUNCIÓN DE REVISIÓN CORRESPONDE A LOS DIVERSOS ÓRGANOS DE CONTROL COMPETENTES CONFORME A LA LEY Y EN TODO CASO, SU PERSONAL PROFESIONAL ORDENADOR O DE EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS, SON QUIENES TIENEN A SU CARGO LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS Y QUIENES DETERMINAN LAS ACCIONES A EJERCER EN ESA MATERIA..."

8. Consecuentemente, si bien al momento de presentar su acto impugnado se había inconformado de la información proporcionada en respuesta, al decir que ésta era incompleta; también lo es, que en un momento posterior, esto es, sus manifestaciones, ya no subsistió inconformidad de la totalidad de la información que le fue proporcionada.



9. LA RECURRENTE no impugnó el rubro correspondiente al punto 3, por tal motivo, queda firme ante la falta de impugnación en específico, pues se entiende que LA RECURRENTE ésta conforme con la información entregada al no contravenir la misma. Sirve de sustento a lo anterior por analogía la tesis jurisprudencial número VI.3o.C. J/60, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 176,608 que a la letra dice:

*"ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz."*

Lo anterior es así, debido a que, cuando LA RECURRENTE impugnó la respuesta del SUJETO OBLIGADO, no expresó razón o motivo de inconformidad en contra del presente rubro, por lo tanto, debe declararse atendido, pues se entiende que LA RECURRENTE está conforme con la información entregada al no impugnarla.

Consecuentemente, la parte de la respuesta que no fue impugnada debe declararse consentida por LA RECURRENTE, toda vez que no realizó manifestaciones de inconformidad; por lo que, no pueden producirse efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado ya que se infiere su consentimiento ante la falta de impugnación eficaz, y por lo tanto se tiene por colmada éste punto

en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Tesis Jurisprudencial Número 3ª./J.7/91, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 174,177, que establece lo siguiente:

*"REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando la sentencia recurrida se apoya en dos o más consideraciones desvinculadas entre sí y cada una de ellas sustenta la declaratoria de inconstitucionalidad de distintos preceptos o actos, no deben estimarse inoperantes los agravios expresados por la parte recurrente que controvierten sólo una de esas consideraciones, pues al tratarse de razonamientos que revisten autonomía, el recurrente se encuentra en posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la sentencia que estime contraria a sus intereses. En ese orden de ideas, cuando alguna consideración de la sentencia impugnada afecte a la recurrente y ésta no expresa agravio en su contra, tal consideración debe declararse firme."*

*(Énfasis añadido)*

10. Derivado de lo transcrito con anterioridad, considero que la incorporación de dicho concepto en la resolución en comento resulta a todas luces innecesario y además no ha lugar a invocarlos en el derecho humano fundamental de acceder a la información pública gubernamental. Por lo que la mayoría consideró que la respuesta quedó firme ante la falta de impugnación respecto al resto de los requerimientos que no fueron manifestados en el recurso de revisión. En el presente asunto que nos ocupa, es de señalar que del análisis hecho a la resolución en comento, no se discute que el SUJETO OBLIGADO ha dado respuesta a la solicitud de información que en lo particular nos ocupan; sin

embargo, en el derecho de acceso a la información, considero, es innecesario señalar la figura de actos consentidos.'

**III. Los actos consentidos no deben invocarse en el derecho fundamental de acceder a la información pública gubernamental.**

11. En la resolución se precisa de manera amplia y solvente, un criterio adoptado en un procedimiento jurisdiccional sobre los actos consentidos. Al respecto estoy convencido de que la garantía constitucional que se desahoga ante esta autoridad corresponde a un procedimiento cuasi jurisdiccional que si bien reúne las formalidades básicas, que no todas del primero, también resulta evidentemente más flexible, más laxo y pretende ser de mayor protección al derecho humano, por eso es que contamos con un sistema electrónico que asiste a la persona que realiza una solicitud o presenta un recurso de revisión, de tal forma que se pretende que ejerza sus derechos sin verse en la necesidad de acudir a un profesionalista del derecho para que le asista en la elaboración de su promoción; contrario a ello, nuestro sistema pretende asistirle y facilitarle el procedimiento, esa flexibilidad se vería seriamente comprometida si este órgano garante decide imponer las cargas formales del proceso jurisdiccional y, al mismo tiempo no asegura otros derechos, el de la defensa adecuada, por ejemplo, incumpliendo así con lo dispuesto en los artículos 74 de la Ley de Transparencia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de México y Municipios y del 146 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que contemplan la figura de la suplencia de la queja.

12. La figura de la suplencia de la queja, para Héctor Fix Zamudio "...puede caracterizarse como el conjunto de atribuciones que se confieren al juez de amparo para corregir los errores o deficiencias en que incurran los reclamantes que, por su debilidad económica y cultural, carecen de un debido asesoramiento, y que puede expendirse, como ocurre en el proceso social agrario, a los diversos actos procesales de la parte débil incluyendo el ofrecimiento y desahogo de los medios de prueba".<sup>1</sup> Según este mismo autor, "...es siempre obligatoria... respecto de los errores o defectos de los conceptos de violación expresados en la demanda, así como los de los agravios formulados en los recursos que el mismo ordenamiento establece".<sup>2</sup>

13. Además es necesario precisar que el presente es un procedimiento cuasi jurisdiccional porque no hay partes en conflicto, por lo tanto lo que este Órgano Garante realice en materia de suplencia de la queja no afecta la igualdad de las partes sino procura el cumplimiento de los deberes de protección del derecho humano a partir del criterio que más le favorezca.

<sup>1</sup> Instituto de Investigaciones Jurídicas. *Diccionario Jurídico Mexicano*. México, Coed. Porrúa e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2001. Pág. 3593.

<sup>2</sup> *Ibidem*. Pág. 3594.

14. No satisfecho con lo anterior, es necesario señalar que en materia del derecho de acceso a la información pública, tiene una justificación clara y precisa que se deriva de un aspecto de singular importancia, ya que lo que tratamos y pretendemos resolver consiste en el ejercicio de un derecho humano constitucional y convencionalmente reconocido. Por tanto, al tratar directamente con un derecho humano, todas las autoridades nos vemos impuestas del supremo mandato constitucional consistente en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma que cualquier esfuerzo que se haga en el sentido de cumplir con dicho mandato no resulta ocioso ni sobra sino demuestra el grado de compromiso de la autoridad con este aspecto total de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011.

15. En este sentido el Dr. Miguel Carbonell ha señalado que:

"Queda claro, en consecuencia, que las obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos corren a cargo de todos los poderes, incluso considerando que algún nivel de gobierno tenga obligaciones reforzadas hacia ciertos derechos. A partir de tales deberes generales, podemos afirmar que las autoridades de todos los niveles de gobierno también tienen la

obligación positiva de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho".<sup>3</sup>

16. Por lo que restringir el derecho de acceso a la información pública del particular suponiendo en el peor de los casos, que en efecto, no se hubiera ordenado la información solicitada por no impugnar la falta de entrega de los documentos solicitados, debilita la efectividad de esta garantía al hacerla depender de un hecho desconocido y, por lo tanto de dudosa acreditación, además que se insiste fue en todo momento innecesario señalar el argumento de actos consentidos.

17. Enfrentar este silencio u omisión de los particulares a inconformarse por algún punto o requerimiento de origen solicitado, cuando es evidente que no le fue entregada la información o satisfecho el derecho de acceso a la información pública con las formalidades del proceso jurisdiccional nos ubicaría en sentido contrario a la evolución experimentada por el Estado Mexicano con la trascendental reforma a la Constitución Federal del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, ya que con ella estamos dejando atrás al Estado de la Ley, en el que la regla se impone sobre el derecho y que coloca a conceptos como la seguridad jurídica en la base legitimadora de todo el sistema ya que como bien señala el Dr. Rodolfo Luis Vigo "La seguridad jurídica entendida

<sup>3</sup> CARBONELL, MIGUEL. "Las obligaciones del Estado en el artículo 1º. de la Constitución mexicana" en CARBONELL, Miguel y SALAZAR, Pedro, coords. La reforma constitucional de derechos humanos. 2ª. Edición, México. Coed. Porrúa e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2012. Pág. 68.

como previsibilidad jurídica fundada en las normas generales reproducidas estrictamente por los jueces, o como el orden pacífico surgido del libre goce y disponibilidad de los derechos individuales, monopolizará el horizonte axiológico de los juristas decimonónicos”.

18. Frente a esa realidad pasada, la reforma citada nos ubica completamente en nuevas condiciones bajo los criterios del Estado Constitucional de Derecho que nos debe conducir a valorar, junto con Sergio Cotta que “la obligatoriedad de la norma depende de la validez de su justificación, que es, por consiguiente el fundamento de aquella”,<sup>4</sup> y no puede existir validez en la aplicación de un criterio que propicia una riesgosa afectación al derecho de acceso a la información.

19. Mucho menos si consideramos el siguiente criterio: DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE PROTEGERLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

<sup>4</sup> COTTA, Sergio. *Justificación y obligatoriedad de las normas*. Madrid. Ed. Ceura, 1987. Pág. 10.

progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de protegerlos. Ésta puede caracterizarse como el deber que tienen los órganos del Estado, dentro del margen de sus atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya sea que provengan de una autoridad o de algún particular y, por ello, debe contarse tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción ante el riesgo de vulneración del derecho, de forma que se impida la consumación de la violación. En este último sentido, su cumplimiento es inmediatamente exigible, ya que como la conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las personas de las interferencias a sus derechos provenientes de los propios agentes del Estado como de otros particulares, este fin se logra, en principio, mediante la actividad legislativa y de vigilancia en su cumplimiento y, si esto es insuficiente, mediante las acciones necesarias para impedir la consumación de la violación a los derechos. De ahí que, una vez conocido el riesgo de vulneración a un derecho humano, el Estado incumple su obligación si no realiza acción alguna, sobre todo, porque, en el caso de sus propios agentes, está obligado a saber todo lo que hacen. [TA] Tesis: XXVII.3o.3 CS (10a.) Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Página: 2840.



20. Para el caso que nos ocupa y en general es innecesario incorporar en las resoluciones de un Órgano Garante como lo es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios a los actos consentidos toda vez que los particulares al no impugnar alguno de los requerimientos solicitados, y de la respuesta ofrecida por parte de los SUJETOS OBLIGADOS sea evidente la falta de alguno de ellos, en ese tenor los particulares se ven impedidos, en los hechos, a acceder a una información que fue solicitada. Ante tales casos, considero, este Órgano Garante debe cumplir con las obligaciones señaladas en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Federal, lo que es posible a través de la suplencia de la queja, instrumento adecuado para prevenir una posible vulneración al derecho de acceso a la información y que además se encuentra disponible para ser operado por esta autoridad.

21. Pero además, la figura de la suplencia de la queja es central para apreciar la verdadera fuerza de los derechos humanos, entre ellos el de acceso a la información, que demandan una actuación clara, contundente y eficaz por parte de todas las autoridades, en el que ya no resultan admisibles las excusas de procedibilidad, ya que en todo momento nos encontramos ante un derecho más alto que, puede considerarse en los siguientes términos:

*"Las Constituciones contemporáneas intentan poner remedio a estos efectos destructivos del orden jurídico mediante la previsión de un derecho más alto, dotado de fuerza obligatoria incluso para el legislador. El objetivo es condicionar y, por tanto, contener, orientándolos, los desarrollos contradictorios de la producción del derecho, generados por la heterogeneidad y ocasionalidad de las presiones sociales que se ejercen sobre el mismo".<sup>5</sup>*

22. Por lo tanto, frente a ese derecho más alto, los argumentos formales deben ser derrotados por la obligación que el legislador ordinario nos ha impuesto para asegurar la efectiva protección del derecho en cuestión a través del ejercicio de la figura de la suplencia de la queja, con lo que se pretende asegurar una efectiva protección. Declinar esa obligación por la experiencia pasada nos aleja del mandato constitucional y pretende otorgar plena certeza a la presunción de que la solicitud ha sido atendida, lo que de no ser así, afecta el derecho humano.

23. Considero que no se justifica el argumento que se ha señalado en múltiples ocasiones y que comparte la mayoría en relación a "si no ésta expresa razón o motivo de inconformidad en contra de todos los rubros solicitados, dichos rubros deben declararse atendidos, pues se infiere que el recurrente ésta conforme con la información entregada al no contravenir la misma". Este Órgano Garante debe revisar en forma minuciosa en todos los casos, si se le

---

<sup>5</sup> Zagrebelsky, Gustavo. *El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia*. Trad. Marina Gascón, 10ª. Edición, Madrid, Ed. Trotta, 2011. Pág. 40.

entregó a los peticionarios todos y cada uno de los puntos que fueron solicitados, de esta forma se podrá verificar si el particular no se inconforma porque en efecto le han sido colmadas sus peticiones y por ello se tiene por satisfecho el Derecho de Accéder a la Información Pública, o bien, no le han sido colmados todos sus requerimientos y omite manifestarse al respecto, por diversos factores que a su alrededor ocurran y le puedan afectar. Además de ser un Órgano Garante, somos un Órgano Revisor y en ese sentido no podemos pasar inadvertido el hecho de no analizar la totalidad de requerimientos solicitados cuando no se pronuncien al respecto, cuando sea evidente que no han sido colmados, en ese sentido no estaríamos garantizando el derecho fundamental.

24. Adoptar la posición que propongo pretende ordenar un acto de plena certeza, el que siempre puede ser matizado por un "en su caso" que restringe la medida ordenada a que ésta no se haya realizado ya, lo que puede constituir un exceso, cierto, pero a todas luces admisible en materia de protección del derecho humano lo que, considero, fortalece al Estado Constitucional de Derecho, en lugar de vulnerarlo.

JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ

COMISIONADO

JGLH/msa

(Rúbrica)